RECURSO 84/2019

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

SENTENCIA N°: 394

PRESIDENTE:

D^a DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ

MAGISTRADOS:

D. RAFAEL PÉREZ NIETO

D. ANTONIO LÓPEZ TOMÁS

En Valencia, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS los presentes autos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo número 84/2019, deducido por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA, representada y asistida por el letrado de sus servicios jurídicos, contra la Resolución de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de 8 de enero de 2019 por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía Pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje El Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena. Ha sido parte demandada la GENERALITAT VALENCIANA, representada y asistida por la letrada de la generalitat, habiendo comparecido como codemandado SEPES, representada y asistida por el Abogado del estado. La cuantía se ha fijado en indeterminada. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio López Tomás.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, y seguidos los trámites legales, se emplazó a la demandante para que formalizaran la demanda, lo que verificó mediante escrito solicitando se dictara sentencia en los términos que constan en el suplico

SEGUNDO .- La Generalitat Valenciana contestó a la demanda mediante escrito

alegando la inadmisibilidad del recurso, y sobre el fondo, solicitó el dictado de sentencia que desestimase el recurso.

TERCERO .- Por la Sala se acordó el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose y practicándose las pruebas propuestas por las partes que fueron estimadas pertinentes. Finalizado el trámite conclusiones, se declaró el pleito concluso, quedando los autos pendientes de votación y fallo, señalándose para el 8 de septiembre de 2021.

CUARTO.- En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de recurso la Resolución de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de 8 de enero de 2019 por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía Pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje El Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena.

SEGUNDO .- La Diputación de Valencia alega, en su demanda, que es propietaria, desde 1966 de 7 parcelas que dieron lugar a la actual finca registral 26.490 del Registro de la Propiedad de Requena, y la vereda real discurre por el linde Norte de la citada parcela. Se indica que la vereda Real de San Juan tenía una anchura de 20 metros y que el deslinde propuesto comprende una anchura de 75 metros.

Se relata, asimismo, que la Cañada Real de San Juan fue objeto de clasificación por Orden de 20 de octubre de 1971, fijando una anchura necesaria de 35 metros, quedando un sobrante de 40,22 metros, y, sin embargo, el deslinde objeto de recurso comprende una anchura de 75 metros.

Por ello, en su fundamentación jurídica, considera que el deslinde no se ajusta al acto de clasificación, debiendo comprender un ancho de 35 metros, y no de 75, y que el deslinde desconoce el derecho de propiedad de la actora. Por todo ello, solicita se dicte Sentencia por la que se anule la resolución recurrida y se acuerde que el deslinde se realice con y una anchura de 35 metros excluyendo una superficie de 11.863m²

TERCERO .- La Generalitat valencia, en su contestación, alega, con carácter

previo, la inadmisión del recurso por extemporaneidad, pues la resolución se notificó el 7 de febrero de 2019 y el recurso se interpuso el 8 de abril de 2019, habiendo transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 46,.1 LJCA.

En cuanto al fondo, alega la conformidad a derecho de la resolución recurrida, indicando que la clasificación de las vías pecuarias determinó que todas las cañadas del término municipal tienen una anchura de 75,22 metros, y la Cañada Real de San Juan una anchura necesaria de 35 metros, haciendo referencia al artículo 13.3 de la Ley 22/1974, que fue derogada por la ley 3/1995, y las disposiciones transitorias 2ª y 3ª de la Ley 3/2014, de 11 de julio de la generalitat, de Vías pecuarias. Por otra parte, alega que la Diputación reitera los argumentos expuestos en fase de alegaciones, por lo que da por reproducido lo señalado en el informe del instructor.

El Abogado del estado, en la representación que ostenta, solicita la desestimación del recurso.

CUARTO.- Pues bien, así planteada la cuestión, procede rechazar, con carácter preliminar, la causa de inadmisibilidad alegada por la generalitat y ello por cuanto el recurso se interpuso, según el registro de Lexnet, en fecha 5 de abril de 2019, por lo que se encontraba dentro del plazo previsto en la norma.

Dicho lo cual, y entrando a resolver sobre el fondo de la cuestión, el recurso debe ser estimado, y ello por los argumentos que pasamos a exponer.

En efecto, como esta misma Sala y Sección ha tenido oportunidad de pronunciarse en la Sentencia 355/2019, de fecha 14 de junio de 2019, dictada en el recurso 22/2017 (Ponente Sra. Iruela Jiménez), citada por la actora en su escrito de conclusiones:

Ha de partirse a tal efecto de los arts. 7 y 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias . El primero de ello indica que la clasificación "es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria ". Y el art. 8 señala, en su apartado 1, que "El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación".

Por su parte, la Ley 3/2014, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, en lo que ahora interesa, dispone en el mismo sentido en su art. 14.1 que "El deslinde es el acto administrativo que define los límites debidamente georreferenciados de las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación", y añade el

apartado 2 del precepto que "El deslinde ejecutará y complementará la clasificación en aquellos tramos en que sea necesaria una especial precisión en la determinación de la anchura y límites de las vías pecuarias".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la relación entre los actos de clasificación de las vías pecuarias y el deslinde, habiendo manifestado que la definición en el deslinde de los límites de una vía pecuaria ha de efectuarse de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación - art. 8.1 de la Ley 3/1995 -. Como señala, entre otras, la STS 3ª, Sección 4ª, de 9 de julio de 2013 -recurso de casación número 2655/2011 -, ha sido una constante en la legislación española la exigencia de que el deslinde de vías pecuarias quede subordinado y se acomode a las determinaciones del acto de clasificación, sin que, con ocasión del acto de deslinde, quepa atacar el acto de clasificación y su contenido, pues a tenor del precitado art. 8.1 de la Ley 3/1995 la clasificación condiciona el deslinde.

En el presente caso, la Orden Ministerial de 29 de octubre de 1971 aprobó la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Requena encontrándose entre las "vías pecuarias excesivas" la Cañada Real de San Juan, junto con otras dos. Estas tres cañadas tienen una anchura de 75,22 metros, reduciéndose a 35 metros, quedando un sobrante enajenable de 40.22 metros.

Es claro, por tanto, que la Generalitat, al aprobar el deslinde de la vía pecuaria, debió atenerse a la anchura de la misma determinada en la Orden Ministerial de 1971. A esta conclusión se llega incluso partiendo de las propias alegaciones formuladas por aquella Administración en la contestación a la demanda, cuando afirma que el deslinde se configura como un acto subordinado a la clasificación y como acto de ejecución y complemento de la clasificación

Procede, a resultas de todo lo fundamentado, estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la resolución recurrida.

QUINTO.- En aplicación del *art. 139.1 de la Ley 29/1998* , ha lugar a hacer expresa imposición de costas procesales a la Administración demandada, al haber visto rechazadas todas sus pretensiones.

No obstante, la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el *art. 139.4 de la*

citada ley , limita el importe de las costas fijándolo en la cifra máxima total de 1000 en concepto de defensa y representación de la parte actora, atendiendo a la actividad procesal desplegada por ésta, así como a la índole del asunto y a su grado de dificultad.

Por cuanto antecede,

FALLAMOS

1.- **DESESTIMAR** la causa de inadmisibilidad alegada por la generalitat Valenciana;

2.- **ESTIMAR** el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA contra la Resolución de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de 8 de enero de 2019 por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía Pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje El Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena

3.- Anular la resolución administrativa impugnada, por ser contraria a derecho.

4.- Reconocer, como situación jurídica individualizada, el derecho de la recurrente a que se excluya del deslinde la superficie de 11.863m² afectada por el proyecto en los términos solicitados.

5.- Condenar a la Administración demandada al pago de las costas procesales, cuyo importe se limita por la Sala fijándolo en la cifra máxima total de 1000€; en concepto de defensa y representación de la parte actora.

La presente sentencia no es firme y contra ella cabe, de conformidad con lo establecido en los *artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa* , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la

Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162, de 6 de julio de 2016).

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Letrada de la Administración de Justicia de la misma, certifico.